

AGENDA CIUDADANA

LA DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE LA CRISPACION

Lorenzo Meyer

La Pregunta es Pertinente, pero la Respuesta Insatisfactoria.- En esta coyuntura de falla generalizada en el liderazgo político mexicano, de imposibilidad de acuerdos básicos sustantivos en la clase política, de movilización callejera de la clase media en la ciudad capital en demanda de eficacia en el desempeño de las responsabilidades básicas del gobierno, de descontrol del proceso político, de ausencia de un proyecto nacional real y de incertidumbre sobre el porvenir colectivo, alguien me invitó a responder a una interrogante tan vital como imposible de contestar con certeza: ¿cuál es el futuro de la joven e inexperta democracia mexicana?

La ciencia política resulta ser una disciplina particularmente inefectiva en el desempeño de una tarea que se supone es propia de toda ciencia: predecir. Y es que las variables que intervienen en un tema tan amplio como es la consolidación de un régimen – democrático o de cualquier otra índole-- son tantas y tan difíciles de identificar y aún más de medir, y la cadena de relaciones causales es tan larga y complicada, que sencillamente no hay teoría adecuada para dar respuesta clara a la cuestión planteada. Sin embargo, algo se tiene que hacer para otear el horizonte de un asunto donde está en juego no sólo un tema académico sino la esencia de la vida pública de una nación.

¿Qué es la Democracia y la Democratización?- De entrada, definiciones claras sobre democracia no hay. La que uso Abraham Lincoln es atractiva --“El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”-- pero terriblemente imprecisa (¿qué es “pueblo”?, ¿donde “el pueblo” como tal ha gobernado? ¿Como se determina si una acción de gobierno efectivamente beneficia al “pueblo”?). Para Robert Dahl, un teórico más cercano en el

tiempo, la democracia es el régimen donde el gobierno está obligado a responder sistemáticamente a las demandas de los gobernados que, en tanto ciudadanos, son iguales políticamente. (Polyarchy: Participation and Oposition, 1971, p. 1) Un par de decenios más tarde, Phillippe Schmitter y Terry Karl, definieron a la democracia como un sistema político donde los ciudadanos constituyen una categoría numerosa de los miembros de una sociedad y, mediante la elección de representantes que actúan en una combinación de competencia y cooperación, pueden exigir efectivamente a los gobernantes que respondan a sus demandas (en Larry Diamond and Marc Plattner (eds), The Global Resurgence of Democracy, 1993, p. 45). En los dos últimos casos, a la definición básica requiere que se le añaden, para precisarla, una serie de requisitos: marco constitucional, libertad de asociación, acceso a información, elecciones libres, etc. Para nuestro propósito, el rasgo fundamental de ese sistema de gobierno es la institucionalización de un mecanismo para que las exigencias ciudadanas a los gobernantes –diversas y contradictorias-- sean respondidas mediante un mecanismo de competencia en condiciones de libertad y equidad.

De la Certeza a la Duda.- Una vez que quedó claro el triunfo norteamericano en la llamada Guerra Fría, en 1991, apareció el trabajo de un académico norteamericano, Francis Fukuyama, que resumió el optimismo propio del vencedor, al formular una teoría según la cual no sólo la expansión democrática iba a seguir adelante sino que finalmente la democracia (junto con el libre mercado) estaba destinada a ser la única forma legítima de gobierno a nivel mundial, (El fin de la historia y el último hombre, Planeta 1992). Desde la perspectiva de Fukuyama, la humanidad acababa de abrir un nuevo, estupendo y definitivo capítulo en su historia. En contraste, Samuel Huntington, otro influyente académico norteamericano, fue más cauto. En La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX, (Paidós, 1994), reconoció los progresos hechos por la democracia a partir de su triunfo

en 1974 en el sur de Europa que, como una ola, se expandió a otras regiones del globo. Sin embargo, el profesor de Harvard ya no estaba tan seguro de que ese impulso democratizador pudiera continuar y, desde luego, él no veía ninguna razón para sostener que la democracia había triunfado de una vez y por todas.

Hoy el optimismo de inicios de los años noventa resumido en la obra de Fukuyama se ha debilitado bastante, entre otras cosas, porque hay regiones donde el tema político simplemente no pasa por la democracia, como es el caso de buena parte del mundo árabe. En la actualidad se acepta que la democracia es frágil en muchos de los países que la acaban de adquirir –México entre ellos-- y que nunca debe darse por sentado que una vez implantado ese peculiar sistema de gobierno, éste tiene la existencia asegurada.

El Caso de América Latina.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acaba de dar a conocer un bien fundamentado e inquietante Informe sobre el desarrollo democrático en América Latina. Este documento debería ser lectura obligada de nuestra clase política y de todos los que estén interesados en la consolidación de esa forma de gobierno en nuestra región. El punto de partida y, a la vez, la conclusión más importante de ese diagnóstico elaborado a partir de observaciones hechas en 18 países del subcontinente, y donde lo mismo se encuestó a ciudadanos de a pié que a políticos y académicos, es el siguiente: hay una creciente insatisfacción ciudadana con la democracia o, para no ponerlo en términos tan negativos, hay un malestar que hasta ahora es menor con la democracia y más dentro de la democracia. Pero de continuar las tendencias actuales, el malestar puede terminar por volverse en contra de la democracia por no responder de manera adecuada a las aspiraciones del grueso de la población latinoamericana.

Para el PNUD, las recién ganadas libertad e igualdad políticas se han combinado con una crisis social de gran magnitud, que obligan a que la democracia tenga que arraigar

en un terreno muy escabroso; uno donde la nota característica es la pobreza, la falta de dinamismo de la economía más una profunda desigualdad social. En América Latina el 43.9% de la población es pobre y casi el 19.4% lo es en extremo. La otra cara de esta moneda es la alta concentración del ingreso, esa que lleva a que el 10% más rico tenga poco más del 40% del ingreso disponible y el 10% apenas supere el 1%. Y es que la democracia latinoamericana no ha sido capaz de desempeñar una de sus funciones centrales: dar representatividad política efectiva a una buena parte de los grupos que tradicionalmente han vivido marginados. Y por si lo anterior fuera poco, ese estudio también señala que es general la ineficiencia del aparato judicial, que el respeto a los derechos humanos dista de ser satisfactorio y que la corrupción y la acción de grupos de interés sobre el Estado, interfieren seriamente con la efectividad del desempeño del sector público, especialmente en lo que se refiere a la seguridad social: salud, educación, vivienda, empleo.

De los instrumentos políticos de la democracia, los que más han fallado en América Latina son los partidos políticos y, justo por ello, los congresos. En toda la región menos de una cuarta parte de la ciudadanía apoya a esas instituciones. Por eso se explica que poco más del 50% de los latinoamericanos se digan dispuestos a intercambiar el actual régimen democrático por otro que prometa un progreso socio económico efectivo. Afortunadamente, hoy por hoy, el sistema internacional en el que se mueve la América Latina no acepta, como sí fue el caso durante la Guerra Fría, la alternativa autoritaria. Pero ser democrática por default no es la mejor base para la consolidación de ese régimen político en nuestra región. Hay que lograr que la democracia sea lo que Amartya Sen propone: un proceso en virtud del cual se expanda en de manera permanente las libertades de las que goza un pueblo.

Facetas del Problema en México.- Si nos atenemos al viejo principio de “por sus frutos los conoceréis”, entonces el futuro de la democracia tanto en América Latina como

en México, sin ser negro, dista de ser luminoso. Hasta hoy, los logros obtenidos dentro de ese sistema han sido bastante menos de lo que se esperaba de él.

Para empezar, la clase política mexicana —una mezcla de partes casi iguales del viejo y del nuevo régimen— no ha podido llegar a los consensos básicos para que, a partir de un puñado de grandes objetivos recogidos de las demandas ciudadanas de los últimos años, el Ejecutivo, los grandes partidos representados en el congreso y los gobernadores de los estados, pudieran haber dado ya forma al marco legal y político del siglo XXI. En efecto, a estas alturas ni el panismo-foxismo en el poder, ni el viejo PRI (el único que existe, puesto que nuevo PRI, simplemente no hay) o el PRD —que a querer o no es la izquierda que el país tiene— en la oposición, han sido capaces de diseñar el gran proyecto nacional de la democracia. Es por ello que hasta el día de hoy México sigue funcionando —mal funcionando— con las estructuras creadas en la época autoritaria y no se han podido concretar las necesarias reformas del Estado, fiscal, energética, laboral o educativa. Tampoco ha sido posible llevar a cabo la necesaria transformación del costoso sistema electoral ni tenemos la legislación idónea sobre los derechos indígenas que ponga en camino de solución el conflicto de Chiapas y los agravios históricos en otras zonas del país. Tampoco se han dado los cambios de fondo que necesita el sistema de administración de la justicia para que empiece a dar respuesta satisfactoria a las exigencias ciudadanas. Ni que decir que los “peces gordos” de la corrupción siguen nadando en las turbias aguas de la vida pública mexicana. En relación a la vigencia del Estado de derecho y en una escala de 0 a 6, el Banco Mundial colocó hace poco a nuestro país en el 2.7, ni siquiera llegamos a la mitad del camino que deberíamos de haber ya recorrido en esa materia.

Un gobierno dividido como el que resultó de las elecciones del 2000 y el 2003 —el Ejecutivo en manos de un partido pero el Congreso y la mayoría de los gobiernos locales en

manos de otros— puede ser una forma muy deseable de división del poder en una democracia ya arraigada, pero en una apenas naciente, como la mexicana, tal división ha dado por resultado un empate que ha desembocado en un empantanamiento del proceso político general. La realidad heredada del autoritarismo sigue sin modificarse en lo sustantivo al punto que son las inercias las que siguen imprimiendo el rumbo del país. El México en que hoy vivimos no es el deseado por ninguno de los actores formales y legítimos, pero es uno que resulta muy conveniente para actores ilegítimos como el narcotráfico, el crimen organizado o los responsables de los abusos del poder en el pasado.

La democracia mexicana no ha logrado enfrentarse con éxito a problemas urgentes y concretos que ya se nos vienen encima. La inseguridad sigue imbatible. En materia de energía y para que el suministro no falle, es necesario invertir en los próximos diez años 583 mil millones de pesos, pero a estas alturas no hemos decidido quién será el inversor y en que condiciones se hará esa inversión. El sistema de pensiones se ha convertido en un hoyo negro que devora cada vez más recursos y nada se ha hecho para tapanlo. El año pasado el IMSS y el ISSSTE erogaron por concepto de pensiones 66 mil millones de pesos uno y 32 mil millones de pesos el otro, pero sus recursos propios apenas alcanzaron para cubrir 23 mil millones y ocho mil millones respectivamente. De no haber cambio, en un tiempo no se podrá hacer frente a los compromisos de ambas instituciones. La enorme carga que representa para el erario el IPAB sigue sin contar con la legitimidad política que justifique esa enorme canalización de recursos a un sistema bancario que de tiempo atrás simplemente ya no cumple con su papel de facilitar crédito al aparato productivo mexicano.

Y la lista de problemas de nuestra joven democracia puede seguir. Sin embargo, el primer gran obstáculo para resolverlos es justamente la baja calidad de la clase política, luego está la estructura social heredada —su terrible desigualdad— así como una añeja

cultura política que ha resultado muy tolerante con la corrupción. Pero terminemos con una nota optimista; la mejor salvaguarda de la democracia es la conciencia cada vez más generalizada de la indiscutible legitimidad de sus principios: libertad, tolerancia, límites al poder, legalidad e igualdad de derechos, entre otros. Afortunadamente, aquí y hoy, no hay ninguna oferta que compita con tan atractivo arcoiris de principios y objetivos.